La reforma en acción

En estos estudios he prescindido deliberadamente de analizar los programas escritos de los partidos, ni las reformas de carácter jurídico o constitucional, propuestas o realizadas en la época de la República "en forma". Estimo que este orden de hechos ha ocupado en nuestra historia un sitio excesivo con relación a su importancia real. Tales programas

mó: ¿qué piensa hacer con esos siúticos? ¿No sabe que son ingobernables e incapaces de Gobierno?" Este exabrupto trajo consigo la renuncia de Vergara.

e ideologías no suelen ser sino el reflejo literario o legal de revoluciones sociales mucho más hondas. Debemos considerarlas más bien como efectos que como causas.

La palabra "reforma" tuvo un gran empleo en la literatura política chilena, desde 1849 hasta 1891; pero su sentido cambió un tanto con el tiempo.

El primer movimiento reformista fué principalmente antimonárquico: tendía a la "realización práctica de la República".

Por ese tiempo, todos los hombres ilustrados y capaces de pensar, cualquiera fuese el partido a que pertenecían, estimaban que la democracia era la única forma política de acuerdo con la razón, y el secreto de los progresos futuros: a ella llegaríamos, tarde o temprano. Las divergencias en el modo de apreciar este problema no eran de fondo sino de forma. Los unos querían marchar más rápidamente, y los otros con mayor lentitud: el lastre y el velamen de Macaulay.

La formación abogadesca de nuestros pensadores y estadistas les inclinó, en un principio, a considerar este problema casi exclusivamente bajo su aspecto técnico constitucional. Atribuían el "atraso político" del país, y el triunfo de la reacción monárquica de Portales, a la Carta de 1833. Esta debía reformarse, por tanto, en el sentido de desarmar al Ejecutivo, y de dar al pueblo una participación más directa y efectiva en la dirección del Estado. Independencia de los poderes públicos, debilitamiento de la autoridad presidencial, desarrollo del sistema electivo y de las asambleas de origen popular, ampliación de las libertades políticas escritas, tendencia a la autonomía provincial y local, tal fué el sentido de la ideología liberal en su primer periodo. El fondo religioso y moral del problema casi no interesaba a esa generación: desde tal punto de vista, pipiols y pelucones eran, en general, **conservadores**, como diríamos hoy.

Entre los intelectuales de alto coturno, fué don José Victorino Lastarria el primero en imprimir al movimiento reformista una dirección más honda. En su concepto, no bastaba destruir las instituciones de carácter monárquico, sino también las fuerzas espirituales orgánicas en que descansaba el orden tradicional: la religión, el respeto hereditario

a la autoridad establecida, los sentimientos de disciplina jerárquica, etc.

Los hombres moralmente libres de las amarras del pasado serían, por este solo hecho, buenos republicanos. Esta doctrina, fácil es comprenderlo, se deriva muy de cerca del culto al "hombre natural" de Rousseau, razonable y bueno, desde que deja de estar esclavizado por las creencias e instituciones de la cultura tradicional.

Los ideales de reforma "política" no penetraron en el alma de la sociedad chilena, y tuvieron sobre los acontecimientos muy escasa influencia. Los programas y proyectos de esta índole, aún los que se llevaron a la práctica, pueden ser considerados como simples juegos académicos, que interesaban a un pequeño grupo de hombres de derecho; el vulgo, aún el de más elevado rango social, no parecía comprenderlos siquiera. Estoy seguro de que si la Constitución de 1833 hubiera permanecido intacta hasta el momento en que escribo, esta circunstancia no habría cambiado, sino en insignificantes detalles, el curso general de nuestra historia.

Muy diversa fué la fortuna del movimiento de emancipación moral, porque éste, aunque ideológicamente paralelo del otro, pudo ser mejor comprendido, sobre todo por lo que tenía de religioso. Desde 1868, cuando en las alturas sabias se hablaba de reforma, el vulgo entendía hostilidad al clericalismo, esto es, a las cadenas "espirituales" que comenzaba a aborrecer o a desdeñar. Es que la rebelión de las almas contra los fundamentos de la cultura hereditaria, que caracteriza a los tiempos modernos, iba penetrando poco a poco hasta las más profundas capas de la sociedad. Era natural que en éste como en todos los fenómenos del mismo género que recuerda la historia, el derrumbe de las creencias precediera en el vulgo a la disociación política, económica y social.

De allí la popularidad casi exclusivamente teológica, de la Alianza Liberal hasta tiempos muy vecinos a los nuestros: sólo mucho más tarde, casi ayer, la Alianza, esto es, el reflejo político de la revolución moral, vino a teñirse de caracteres de otro género: la hostilidad social, por ejem-

plo. Pero, lo que hay de más interesante en el movimiento de que hemos sido testigos, es que el alma chilena casi ignoró, en todos los tiempos, su aspecto político. Las consecuencias democráticas, en el sentido burgués, de la revolución moderna no penetraron nunca profundamente en el corazón de las masas, y no fueron más allá de los intelectuales nutridos en lecturas exóticas o empapadas en los convencionalismos jurídicos del derecho público. Según dicen, otro tanto ha ocurrido en Rusia.

Santa María fué fundamentalmente reaccionario, en el sentido político y aún social de la palabra: pero ello no dañó a su prestigio ante el país "liberal". Estábamos en pleno período teológico, y en él permaneceríamos por mucho tiempo más. Balmaceda cayó luchando por las prerrogativas presidenciales, y, aunque sus adversarios de la oligarquía enarbolaron en su contra la bandera de todas las reformas políticas, desde la libertad del sufragio hasta el parlamentarismo absoluto, aunque combatían por las fórmulas radicales de la democracia de entonces, su causa, debemos confesarlo, no fué nunca verdaderamente popular. ¿Seremos, un país monárquico, sin saberlo, como hablaba en prosa el personaje de Molière? No lo creo por mi parte: en los diversos períodos de su desenvolvimiento, los países cambian de alma, y a veces ven destruída la que tuvieron, sin haber adquirido otra nueva. En política, no son por lo regular lo que quieren, sino lo que pueden. Lo mismo ocurre a los individuos.

No corresponde a mi propósito analizar sino muy someramente las reformas teológico-jurídicas de la Administración Santa María. No debe olvidarse, sin embargo, que ellas obedecieron a algo más que a un propósito de popularidad. El antiguo sistema de relaciones entre la Iglesia y el Estado, perfectamente lógico dentro de un país de unidad moral católica, ya no se adaptaba sino muy imperfectamente a las necesidades de los tiempos. El clero y los devotos le combatían al igual que los liberales y los incrédulos; ninguno de los cónyuges se hallaba bien en un matrimonio en el cual no existía la unión de las almas. Los conflictos nacían no de la intemperancia de la Iglesia, ni de la hostili-

dad sistemática de los Gobiernos, sino de la naturaleza misma de las cosas. El desacuerdo entre ambas potestades era ya un hecho, antes que lo consagraran las reformas jurídicas. El ultramontanismo y el liberalismo marchaban, sin sospecharlo, hacia una misma solución: el divorcio del antiguo pacto.

Las resistencias que el orden tradicional de relaciones entre la Iglesia y el Estado encontraba en el clero, produjeron, a principios de la Administración Santa María, una crisis de alguna gravedad. A la muerte del Arzobispo Valdivieso, el año 1878, el Gobierno designó para reemplazarle, al prebendado don Francisco de Paula Taforó, sacerdote dignísimo, hábil y caritativo.

Sin embargo, la Corte Romana se negó a preconizar al electo, sin otro motivo aparente que la existencia de una irregularidad canónica de esas que el Papa dispensa con relativa facilidad. La verdad de las cosas es que el alto clero chileno, ligado como estaba al partido conservador, no veía con agrado la elevación a la silla metropolitana de un sacerdote partidario de solucionar por la concordia y las concesiones recíprocas, los conflictos que se suscitaban entre la Iglesia y el Poder Civil. Los liberales y el Gobierno imaginaron, pues, (y acaso no sin motivo) que la actitud de Roma obedecía a sugerencias y cábalas inspiradas por el interés político del partido conservador.

Ello dió origen a un largo conflicto que vino a culminar en la ruptura diplomática del Gobierno de Chile con la Corte Romana; el Nuncio de Su Santidad, Monseñor Del Frate, recibió sus pasaportes, y la Sede Metropolitana de Santiago quedó por algunos años vacante.

Este grave incidente contribuyó no poco a afirmar en el espíritu de los estadistas laicos, la convicción de que era necesario proceder a liquidar paulatinamente un orden de cosas que aparecía cada vez más incompatible con las realidades sociales de la época, y que era igualmente resistido por la derecha ultramontana y por la izquierda reformista.

Ya en tiempo de Errázuriz se habían dado, aunque tímidamente, algunos pasos en ese sentido; como, por ejemplo, la abolición de los recursos de fuerza y la del fuero

eclesiástico en materia civil. Estas dos reformas (una favorable al clero y la otra al espíritu laico) tendían, sin embargo, a un mismo objeto: el de preparar el divorcio entre ambas potestades: la Iglesia les prestó, por otra parte, su acuerdo.

El problema del matrimonio civil era de mucho más difícil solución, y la que se le dió bajo el Gobierno de Santa María, examinada a la luz de sus resultados prácticos, ha merecido críticas que no carecen de fundamento. La distinción entre el matrimonio sacramento y el matrimonio contrato, fué copiada de los jurisconsultos franceses, que escribían para un país donde esa doble noción de matrimonio existía en las costumbres. No era éste, como se sabe, el caso de Chile: el pueblo no vió en la ceremonia civil, sino un nuevo matrimonio, hostil al tradicional; el clero y los liberales afirmaban, cada cual por su parte, que uno u otro era el verdadero. Así la reforma contribuyó a desquiciar el concepto tradicional de familia, por lo menos en las clases populares.

Pero el país liberal no vió la reforma sino bajo el aspecto de una conquista teológica, esto es, con los ojos de la fe. Los datos demográficos que parecían condenar el nuevo régimen no produjeron sobre los espíritus ningún efecto: otro tanto debe haber ocurrido en España, cuando la expulsión de los judíos y moriscos, o en Francia, a raíz de ser revocado el edicto de Nantes. Las creencias no razonan, ni para ellas se hizo la estadística. Van tras de triunfos espirituales, de conquistas dogmáticas.

El poder de Santa María, como el de Errázuriz, reposó sobre ese hondo cimiento psicológico.

Pero la fronda aristocrática no veía las cosas en la misma forma simplista del vulgo. Las reformas teológicas exacerbaban las resistencias clericales; cualquiera que levantase pendón de revuelta contra el orden de cosas establecido, podía contar en adelante con un aliado seguro. Además, la religión liberal no era tan fervorosa en las alturas oligárquicas como en las masas: Santa María no bajó sin haberlo experimentado.

XXVII

La agonía del Presidencialismo

El equilibrio entre el poder presidencial y la influencia de los círculos oligárquicos se inclinó alternativamente de uno a otro lado, durante la segunda etapa de la República "en forma". Estos vaivenes parecían responder más bien al carácter de los mandatarios que a transformaciones reales en el espíritu público: Errázuriz dominó sin contrapeso; con Pinto se estuvo a los bordes de la anarquía parlamentaria; bajo Santa María fué restaurado el absolutismo del poder; pero ya en las postrimerías de su Gobierno, este último Presidente pudo ver acumularse los elementos de una nueva fronda, que iba a producir el derrumbe de la autoridad en provecho de la oligarquía.

El partido conservador había cobrado nueva vida al calor de las reformas teológicas; su actitud era de oposición implacable; no le faltaba alguna popularidad, y su personal directivo valía ahora mucho más que en la época fusionista: algunos hombres distinguidos de la derecha liberal o nacional acompañaban a los conservadores desde el último conflicto religioso; la nueva generación del partido, formada en los colegios eclesiásticos y congregacionistas, especialmente en San Ignacio, contaba con algunos hombres jóvenes, ilustrados, enérgicos, batalladores, hábiles en los recursos de la dialéctica. Un prestigioso aristócrata, don Manuel José Irrázaval, les serviría de Mecenas y director espiritual. Hombre estudioso, de carácter entero y sinceras convicciones, su programa era radical y democrático en política; perseguía el anonadamiento e impotencia del Gobierno. Así, el partido conservador católico iba a hacer gigantescos esfuerzos por destruir la obra de Portales, cuyo alto nombre reclamaba, sin embargo, como gloria suya.

Estas tendencias nuevas del partido conservador le

pusieron en contacto con la fronda liberal y los restos del radicalismo, que habían resistido la política absorbente del Gobierno de Santa María, ya en virtud de un sincero idealismo republicano, ya por interés o espíritu de círculo. En las elecciones de 1885, los conservadores conquistaron algunos asientos independientes y los radicales formaron también un grupo más pequeño todavía.

Al aproximarse las elecciones presidenciales de 1886, la propia mayoría liberal-nacional comenzó a dar algunas muestras de indisciplina; tres tendencias iban diseñándose en su seno: la más numerosa y también la más dócil, alrededor de don José Manuel Balmaceda, el primer Ministro de Santa María, y el esforzado campeón de la reforma teológica; la otra, más especialmente aristocrática, defendía la candidatura de don Luis Aldunate, favorito personal del Presidente; por último, la tercera, teñida de cierto espíritu radical, levantaba como pendón el nombre de don José Francisco Vergara.

Santa María hubiera preferido a Aldunate; pero este caballero suscitaba no escasas resistencias. El elemento oficial y gobiernista, disciplinado por Balmaceda, en cuatro años de Ministerio, simpatizaba con este último; el liberalismo espiritual prefería al elocuente campeón de la reforma teológica sobre Aldunate que la había resistido; además, el favorito "in petto" del Presidente era uno de esos aristócratas que ignoran el disimulo; se recordaba que en la época de la candidatura de Santa María, Aldunate abandonó desenfadadamente una reunión política, porque en ella alguien había atacado a los patricios. Por último, los nacionales se inclinaban por lo general también del lado de Balmaceda, más bien por motivos de tradición histórica, que de afinidad de temperamento e ideas.

El sagaz Presidente, que nunca había exteriorizado sus preferencias, supo husmear el lado de donde venía el viento, y la candidatura de su Ministro quedó oficialmente consagrada. Ello fué señal de una fronda parlamentaria, cuyos elementos, bastantes inconexos, no estaban unidos, sino por la común hostilidad a la candidatura de Balmaceda. En ella

formaron los radicales, los liberales independientes. los amigos de Aldunate, y por supuesto, los conservadores.

Como esa fronda estaba en minoría, esgrimió como arma la obstrucción de las leyes de subsidio. Desde el 5 de enero de 1886, el país quedó sin ley que autorizase el cobro de las contribuciones y el 9 del mismo mes, el Presidente de la Cámara de Diputados, don Pedro Montt, después de algunas vacilaciones a las que puso término la actitud decidida del Presidente del Senado, don Antonio Varas, el ilustre Ministro de su padre, declaró cerrado el debate por un golpe de autoridad. La fronda había quedado legalmente desarmada, pero la irritación de sus miembros llegó a su colmo. (1).

La oposición no fué mucho más afortunada cuando se trató de elegir candidato; sus elementos liberales reunieron una convención censitaria, en que las fuerzas de Aldunate y las de Vergara guardaban cierto equilibrio. Además de los liberales independientes y radicales, hacía parte de ella una nacional alducatista, don Agustín Edwards, "el conde Warwick" de Santa María, que ahora iba a desmentir su apodo de "hacedor de reyes"; nadie sino el Presidente fabricaba reyes entonces.

La convención independiente designó a Vergara, lo que produjo el enfriamiento de los alducatistas, e hizo más difícil el acuerdo entre el liberalismo opositor y los conservadores. A los pocos meses, el señor Vergara hubo de renunciar su candidatura, y el campo quedó libre para Balmaceda, que salió elegido sin lucha.

El nuevo Presidente era un hombre joven todavía, de arrogante y distinguida figura, de modales finos y seductores, nacido en un alto rango social, y heredero de un nombre que ya se había ilustrado en la administración de la Colonia. Su inteligencia rápida, su imaginación ardiente, el brillo y la ampulosidad de su verbo, la fogosidad de su tem-

(1) El llamado "golpe de Estado" de 9 de Enero de 1886, no carecía de precedentes en la historia constitucional de Chile. Del mismo modo se procedió en Noviembre de 1858, contra una minoría obstructora, durante la Administración Montt.

peramento, hacían contraste con el carácter frío, opaco, taciturno y calculador de la alta clase social chilena: los "ingleses de la América del Sur" iban a ser dirigidos por un hombre del mediodía. En el fondo del drama que vamos a presenciar, hubo mucho de lo que en los juicios de divorcio se llama "incompatibilidad de caracteres". Otro tanto ocurrirá a Alessandri treinta años más tarde.

Al revés de don Manuel Montt, a cuyo lado hizo sus primeras armas en política, Balmaceda no era uno de esos hombres inmutables e inaccesibles a las sugerencias del ambiente. En 1870, formó en esa brillante juventud del partido nacional organizadora del Club de la Reforma. Desde entonces, y por algunos años, figuró como uno de los tribunos más elocuentes y de los conductores más atrevidos del liberalismo espiritual. Sin fanatismo sectario, incapaz de odios, trabajó, sin embargo, con incansable celo en pro de las reformas religiosas, y también de las políticas: el absolutismo de los presidentes no tuvo un adversario más temible que él. Fué uno de los apóstoles y precursores de ese parlamentarismo de que iba más tarde a ser víctima él mismo, y se mantuvo constante en esta fe casi hasta la víspera del cataclismo final.

Santa María, que no le amaba, se sirvió de su prestigio y elocuencia, ya en la campaña teológica, ya en sus manobras para afirmar la omnipotencia del poder. Hemos antes recordado cómo el Ministro supo imponerse como sucesor.

Balmaceda recibió la República el 18 de septiembre de 1886, en un estado de floreciente prosperidad y de relativa paz en las almas; nada permitía presagiar entonces las tempestades de un próximo porvenir. Los actos del nuevo Presidente, inspirados en un patriotismo sincero, en el anhelo de progreso material y moral, y en la resolución inquebrantable de apaciguar los odios dejados por las últimas luchas religiosas y civiles, parecieron a todos los partidos la aurora de días muy felices para la República.

Se esforzó primeramente en llevar a término la reconciliación del Gobierno con la Iglesia ya iniciada por Santa María, en los últimos meses de su administración: el problema de los cementerios fué resuelto de acuerdo con los

deseos del clero: se propuso para las diócesis vacantes a eclesiásticos distinguidos y fervorosos que obtuvieron la sanción de Roma: se aumentó el Presupuesto de Culto, etcétera, etcétera.

No se mostró menos benévolo el señor Balmaceda con sus adversarios liberales. Desde el primer momento hizo saber que deseaba gobernar con el apoyo de todos los partidos laicos, y que, al mismo tiempo, esforzaría sus deferencias para con el clero y los conservadores.

"Pax multa", había escrito en su escudo el nuevo arzobispo de Santiago, don Mariano Casanova, prelado ilustre a quien corresponde en buena parte el honor de haber puesto fin a las discordias entre la Iglesia y el Estado. Ese mismo era el lema de Balmaceda; quería paz, para realizar su obra de progreso, y su administración, bajo este aspecto, merece, a lo menos, el recuerdo respetuoso de la posteridad.

Pero, precisamente de esos anhelos de paz iba a salir la guerra civil. Ningún hombre, ningún partido fué responsable de ella. La evolución parlamentaria, es decir oligárquica, de nuestro sistema político, venía insinuándose desde largos años atrás: la prosperidad pública, la creciente riqueza del patriciado, los triunfos militares de 1879, dieron alas al movimiento que tendía a independizar los círculos políticos; la vieja autocracia vacilaba desde largos años atrás sobre sus cimientos espirituales carcomidos; ya no se temía al caudillaje, ni a la anarquía democrática, ni al caos sudamericano: la aristocracia y el poder se encontraban solos, frente a frente.

La revolución de 1891, como conflicto armado, fué un hecho accidental: el cambio que ella trajo, de todas maneras se habría producido. Bajo el Gobierno de hombres como Pérez, Pinto o Barros Luco, la revolución que nos llevó del presidencialismo de partido, inaugurado en 1861, al dominio sin control de los círculos oligárquicos, habría sido gradual y pacífica. Balmaceda hubo de luchar, aún con menos fortuna que Montt, contra una ley histórica. La aristocracia, amedrentada por el desorden y el caudillaje, aceptó la reacción autoritaria de Portales; pero, sus instintos viz-

caínos de independencia, sus hábitos feudales de dominación, después de dormitar por algunos lustros habían comenzado a despertar desde tiempo atrás.

Ese poder oligárquico, que sacaba sus fuerzas de la organización misma de la sociedad chilena, era el único capaz de luchar contra la tradición monárquica, heredada de la Colonia, y que Portales restauró. La política de Chile, desde 1849, hasta 1891, se sintetiza principalmente en el conflicto entre dos elementos espirituales orgánicos, que ambos pertenecían al pasado: la aristocracia y la monarquía. Por eso nuestras revoluciones, incluso la de 1891, fueron siempre frondas. Cuando en las angustias del combate final, Balmaceda, como los reyes de la antigua Europa en lucha con el feudalismo, quiso apelar al pueblo, al sentimiento democrático los acontecimientos probaron que el infortunado Presidente había pedido amparo a algo que no existía.